



618/2023, relativo al Juicio Especial de Alimentos, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá.

Lic. María Itzel Ballinas Barbosa.

Lic. Juan José Plaza Ruíz.

PRIMERA SALA REGIONAL COLEGIADA EN MATERIA CIVIL, ZONA 01, TUXTLA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A 9 NUEVE DE AGOSTO DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO.

V I S T O, el toca número **298-A-1C01/2024**, para resolver
el recurso de apelación interpuesto por *****
***** , parte actora, en contra de la **Sentencia Definitiva** de
fecha **16 dieciséis de mayo de 2024 dos mil veinticuatro**,
dictada por el **Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito**
Judicial de Tonalá, en el expediente número **618/2023**, relativo
al **JUICIO ESPECIAL DE ALIMENTOS**, promovido en la **VÍA**
DE CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR, por *****
***** , por su propio derecho y en
representación de los infantes de iniciales **S de J. C.R.** y **L.F. de**
C.R. en contra de *****; y,

1.- En la fecha arriba señalada y dentro del procedimiento de referencia, el Juez del conocimiento dictó sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben:

--- PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente el expediente número **618/2023** para resolver en la vía de **CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR** el Juicio de **ESPECIAL DE ALIMENTOS** promovido por *****

*****, por su propio derecho y en representación de sus niños identificado con las iniciales **S. de J. C.R. y L.F de C.R.**, en contra de ***** **** *****; donde la actora justifico parcialmente su acción y el demandado contestó la demanda en tiempo y forma.- - - - -

---- **SEGUNDO.-** Se condena a ***** **** ***** a pagar por concepto de alimentos definitivos a favor de sus hijos personas menores de edad representados por su progenitora, la cantidad que resulte de **doce días** de salario mínimo diario general vigente en la zona, a razón de \$249.00 (Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) para este año 2024 dos mil veinticuatro, y que al mes en conjunto asciende al monto de **\$2,988.00 (Dos mil novecientos ochenta y ocho Pesos 00/100 Moneda Nacional)** el cual aumentara en la medida que lo determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y esto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues se estima que con este monto el deudor podrá solventar a sus acreedores alimentistas una vida decorosa, tal vez sin lujos pero suficiente para desenvolverse en el status social en que se encuentran acostumbrados, tanto ellos como el propio deudor, dejándose sin efecto la medida provisional impuesta en el auto de radicación.- - - - -

--- TERCERO.- Se le concede al deudor alimentario el término de 5 cinco días para que voluntariamente proceda a hacer el pago de la cantidad señalada por concepto de pensión alimenticia al cual ha sido condenado en la presente sentencia, apercibiéndole que de omitir el

cumplimiento de lo aquí ordenado por conducto de la Actuaría Judicial y asociada de la parte actora, se procederá al embargo de bienes de su propiedad que resulten suficientes para garantizarlos, poniéndolos en depósito o intervención conforme la ley para en su momento hacer trance y remate de los mismos y con el producto de la venta realizar el pago correspondiente por concepto de pensión alimenticia.- - - - -

*---- **CUARTO.-** Por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia, se declara **IMPROCEDENTE** el reclamo instado por derecho propio por la actora y se absuelve al demandado de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en ese sentido, quedando sin efecto la medida provisional ordenada a su favor en el auto de radicación, quedando a salvo los derechos de los contendientes para hacer el reclamo sobre el pago de compensación económica por trabajo doméstico.- - - - -*

*---- **QUINTO.-** Por los motivos expuestos en el considerando respectivo, no se hace condena en costas en esta instancia en términos del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.- - - - -*

*----- **SEXTO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- - - - -**”*

2.- Inconforme con la sentencia pronunciada por el Juez del conocimiento, ***** *, parte actora, interpuso recurso de apelación, formulando agravios en tiempo y forma, mismos que a continuación se transcriben:

*“**ÚNICO AGRAVIO.-** Me causa agravio la resolución recurrida, que medularmente sostiene: (Transcribe texto)*

***PRIMER AGRAVIO.- Falta Control Ex Officio, y de aplicación del principio pro persona y de mayor amplitud del derecho.** Causa agravio la resolución recurrida, toda vez que viola en mi perjuicio el artículo 1, 4º, 14 y 16 Constitucional; en la especie el A quo reconoce la confesión expresa del demandado, al afirmar que nos separamos porque ya que no podíamos vivir juntos, es decir, nos separamos después de vivir en concubinato por más de quince años, en el cual procreamos hijos; sin embargo, el perjuicio en mi derecho se materializa en razón que el A quo es omiso en realizar una interpretación conforme de la figura del concubinato a la luz del derecho humano previsto en los numerales invocados, en el que*

TOCA NÚMERO: 298-A-1C01/2024
EXP: 618/2023.

Constitucionalmente se reconoce al concubinato como una de las figuras de constitución familiar, de las que derivan derechos de familia, como lo es el derecho humano a la pensión por alimentos y su correspondiente reclamación de pago de pensión de carácter imprescriptible; por lo anterior, causa perjuicio a la suscrita que se deje de hacer una valoración del concubinato a la luz del derecho humano a la familia y del principio pro persona y de mayor amplitud del derecho, y omitió desaplicar todo tipo de norma que restrinja el acceso a los derechos humanos de rango Constitucional, porque es evidente que en autos acredite haber vivido más de quince años con el demandado como fue reconocido expresamente al dar contestación de demanda, lo que es suficiente para ponderar la supremacía constitucional de proteger a la familia, incluso en el supuesto sin conceder de existir lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación denomina poli-amor, puesto que la existencia de diverso matrimonio no excluye ni se sobrepone sobre el concubinato que reclamado en la demanda de origen.

Por lo tanto, me deja en estado de indefensión el A quo aplique las numerales y jurisprudencia que señala en la sentencia para sostener incorrectamente que no se acredita el concubinato, porque contrario a ello, **debió** de desaplicar todo tipo de norma que excluya el reconocimiento de concubinato por diversa relación de (sic) demandado, así como la temporalidad que se tiene para reclamar su reconocimiento y el pago de alimentos, puesto que se discrimina a la suscrita por la circunstancia que soy concubina, en correlación con quien pudiera ser esposa sin acreditar la existencia de hecho de vivir en común con el demandado, y de la temporalidad para reclamar el pensión (sic) correspondiente; siendo evidente que se . el derecho humano al reconocimiento de la familia de concubinato y el derecho a reclamar el pago de pensión.

En ese sentido, la sentencia recurrida esta **afecta** de fundamentación y motivación, porque es evidente que el A quo **dejo** de fundar y motivar sobre la procedencia del estudio y aplicación del Control Ex Oficio en el presente juicio, vulnerando mis derechos a la pensión, toda vez que **la suscrita requiero alimentos por dedicarme preponderantemente al cuidado de mis hijos.**

SEGUNDO AGRAVIO.- Incorrecta fijación del monto de la pensión de alimentos. Causa agravio la resolución recurrida, toda vez que viola en mi perjuicio el artículo 1, 4o, 14 y 16 Constitucional; en la especie el A quo considera procedente la pensión de alimentos a favor de mis menores hijos, el equivalente a doce días de alimentos mensual; sin embargo, causa agravio a la suscrita que haya fijado esa cantidad de pensión porque es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de subsistencia de mis hijos acorde a

su edad y nivel de estudio; el A quo omitió tomar en consideración de las necesidades de mis hijos, ya que son dos niños que requieren alimentos suficientes y bastantes, y al dictar sentencia se le concede doce días de salario mensual, lo cual, lesiona el interés superior del menor de contar con el mínimo para su subsistencia, puesto que si se divide esos doce días entre mis dos hijos resulta que a cada uno de mis hijos le corresponde seis días de salario mínimo, ello sin tomar en cuenta que la suscrita requiero alimentos por dedicarme preponderantemente al cuidado de mis hijos, y que además no se especifica la forma en que se le proporcionarán los alimentos; por lo que se deja en estado de indefensión a mis hijos, ya que los alimentos se necesitan diariamente, siendo indispensable para la subsistencia de los menores, por lo que se le pone en peligro al fijarse una pensión alimenticia insuficiente para solventar sus necesidades, afectando su estabilidad física y emocional y su desarrollo en la sociedad.

En el mismo sentido, causa perjuicio a la suscrita la incorrecta valoración del nivel de estudio profesional del demandado, porque al decir del A quo se acredita el grado profesional pero no sus ingresos, por lo que no lo toma en consideración para fijar la pensión; lo anterior, vulnera el interés superior del menor ya que deja de apreciar que el demandado tiene un nivel académico profesional en el que puede obtener ingresos acorde a sus estudios, puesto que está capacitado profesionalmente para percibir salario acorde a su estudio; por lo que resulta evidente que el demandado de forma dolosa deja de percibir ingresos acorde a sus capacidades profesionales. Por lo tanto, causa afectación que no se haya fijado una pensión en la que no se tome en cuenta el nivel académico del demandado, dado que puede recibir mayores ingresos conforme al tabulador de salario profesional, limitando el derecho humano recibir una pensión de alimentos justa y acorde al nivel profesional del demandado.

Asimismo, causa agravio a la recurrente, la incorrecta valoración de los testimoniales (sic) que rindieron testimonio por parte del demandado, puesto que el propio A quo refiere que los testigos manifestaron ser amigos del demandado, siendo que esta calidad los presupone en testificar en su beneficio, además que se le da una incorrecta valoración de dicha probanza, pues de la misma no se advierte el grado de insolvencia de los diversos acreedores del demandado, y omiten dar razón del grado de estudio del demandado y de los ingresos por el nivel profesional que tiene; por lo que es evidente que los testimonias están inducidos en perjuicio del interés superior del menor, de recibir una pensión justa y acorde al nivel profesional del demandado para proveer alimentos. Es por ello que la determinación recurrida causa afectación a los

TOCA NÚMERO: 298-A-1C01/2024
EXP: 618/2023.

derechos humanos de mis hijos, de recibir alimentos suficientes y bastantes para cubrir las necesidades de subsistencia.

Por lo anterior la sentencia recurrida esta afecta de fundamentación y motivación, porque es evidente que el A quo dejo de fundar y motivar la razón para considerar que los menores de edad, mis dos hijos, puede subsistir con los doce días de alimentos decretados; y también omitió pronunciarse sobre la pensión de alimentos en función del grado de estudio profesional contable del demandado, lo cual deja en indefensión a la recurrente, y vulnera el interés superior del menor, de recibir alimentos bastantes y suficientes para cubrir sus necesidades de subsistencia.”

3.- Una vez admitido dicho recurso, el Juez natural dio vista a la parte contraria para que dentro del término de 06 seis días contestara los agravios transcritos en el resultando que antecede, sin que diera contestación a los mismos.

4.- La Presidencia de esta Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, en acuerdo de **02 dos de julio del 2024 dos mil veinticuatro**, formó el presente toca, revocó la calificación del grado y tuvo por interpuesto el recurso apelación en **efecto devolutivo**; al no haber diligencias ni actuaciones pendientes de tramitar, se citó a las partes para oír resolución; remitiéndose los autos a la Titular de la Ponencia “A”, Magistrada María Itzel Ballinas Barbosa, para que elabore el proyecto de sentencia y lo someta a consideración del Pleno.

C O N S I D E R A N D O

I.- Que esta Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado; es competente para conocer y resolver sobre el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los

para el Estado de Chiapas, todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquélla la base de la integración de la sociedad. Por tanto, la autoridad que conozca del juicio de alimentos está facultada para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, en tal virtud, en esta materia los jueces y tribunales están obligados a suplir la deficiencia de los planteamientos de derecho de las partes.

Ahora bien, por cuanto que, en el caso concreto están involucrados dos menores de edad (hijos de las partes) y su derecho de subsistencia es el que se encuentra en *litis*, virtud que deben otorgarse alimentos a su favor, en ese tenor, se tiene el ineludible deber de salvaguardar principalmente su supervivencia e integridad física, pues debe operar en su beneficio la suplencia, ya que con la resolución que se dicte pueden resultar afectados sus derechos o intereses, por ende, se debe observar lo previsto en los artículos 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño³, 8 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 2 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, en relación con los numerales 680-A, 680-B y 982 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, mismos que establecen en su orden lo siguiente:

Convención sobre los Derechos del Niño.

“Artículo 3

intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niñas, niños, adolescentes e incapaces, [...]

³ Fecha de entrada en vigor para México: 21 de octubre de 1990

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.”

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley.”

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas.

“Artículo 2º.- Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades del Estado y de los municipios realizarán las acciones y tomarán medidas necesarias, de conformidad con los principios establecidos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: (...)

IV. Considerar de manera primordial el interés superior de la niñez, en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

V. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, la autoridad competente deberá evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.”

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas.

*“**Artículo 680-A.-** Cualquiera que sea el tipo de juicio en el que intervengan como partes menores de edad o incapaces, deberá suplirse la deficiencia de los agravios, de tal modo que queden protegidos los derechos de los mismos.”*

*“**Artículo 680-B.-** El tribunal de alzada estará facultado para suplir la deficiencia de los agravios, cuando estos tiendan a controvertir los elementos de la acción, excepciones perentorias opuestas oportunamente y valoración de pruebas rendidas en el juicio.*

*“**Artículo 982.-** Conocerán de este juicio los jueces de lo familiar, en donde no los haya conocerán los jueces de lo civil o de jurisdicción mixta, que estarán facultados para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niñas, niños, adolescentes e incapaces, y se soliciten por razón de parentesco, deberá demostrarse este, con las actas certificadas de matrimonio y/o nacimiento o en su caso con los exámenes correspondientes, así como todas las pruebas pertinentes para tal efecto.[...].”*

Disposiciones legales que permiten a este Tribunal de Alzada en suplencia de los hijos acreedores alimentarios el pronunciamiento oficioso acerca de las deficiencias que se

adviertan en el procedimiento del asunto recurrido, dado que la sociedad y el Estado tienen interés en que sus derechos sean protegidos por ser una cuestión de orden público debido al mencionado interés social y estatal de que sean salvaguardados, garantizando su igualdad procesal en el juicio, pero sobretodo, protegiendo principalmente la supervivencia e integridad física del menor de edad involucrado en el juicio.

Ilustra lo anterior, la tesis aislada⁴ sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, del rubro y texto siguientes.

“MENORES DE EDAD. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN TODA SU AMPLITUD, AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE AGRAVIOS EN APELACIÓN, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El artículo 3, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen los tribunales, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. En tanto que el artículo 683, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa regula, en lo que interesa, que la suplencia de la deficiencia de la expresión de agravios opera tratándose de menores de edad cuando se advierte que ha habido en contra del apelante una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, sin que sea factible suplir la falta de agravios. Luego, de la interpretación del precepto legal en

⁴ Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVIII, marzo de 2013 dos mil tres, tomo 3 tres, Tesis: XII.1o.1 C (10a.). Registro. 2003085

cita, conforme con el artículo 3, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, se sigue que cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica del niño, el tribunal de apelación debe suplir invariablemente la deficiencia de los agravios aun en ausencia de éstos, sin que sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia, o el carácter de quién o quiénes hayan apelado, cuenta habida de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a los niños, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que se asegure el interés superior del niño”.

Ahora bien, del análisis efectuado a las constancias que integran el sumario, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 334, fracción VIII⁵ y 400⁶ del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, se advierte lo siguiente:

- **Mediante escrito recibido de 18 dieciocho de septiembre de 2023 dos mil veintitrés** por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles del distrito judicial de Chiapa (sic) de Tonalá, Chiapas, compareció la actora por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad a cuyo nombres corresponden las letras iniciales S. de J. C.R. y L.F.C.R., a promover en la Vía de Controversias del Orden Familiar Juicio Especial de Alimentos, en contra de ***** *****, con base a las prestaciones y hechos ahí señalados, en las que solicita alimentos para sus hijos, así como para ella misma, al señalar es ama de casa. Ofreciendo pruebas pertinentes.
- Asunto del cual correspondió conocer al Juez Segundo Civil de Primera instancia de Tonalá, quien en **auto de 20 veinte de septiembre de 2023 dos mil veintitrés**, entre otras cuestiones admitió a trámite la demanda instada y ordenó emplazar al

⁵ Artículo 334.- Son documentos públicos (...) VIII.- Las actuaciones judiciales de toda especie; (...)

⁶ Artículo 400.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena.

demandado *****; fijó como alimentos provisionales a favor de la actora y de sus menores hijos la cantidad que resultara del 60% sesenta por ciento del Salario Mínimo General Vigente, en la Zona que en el momento de la fijación, correspondía a \$207.44 (Doscientos siete pesos 44/100 Moneda Nacional) diarios que resulta ser la cantidad mensual de \$3,733.92 (Tres mil setecientos treinta y tres pesos 92/100 Moneda Nacional) salvo error aritmético, cantidad que incrementaría conforme aumentare el salario mínimo.

Así también ordenó la realización del estudio socioeconómico a las partes y girar los oficios que señala el artículo 984 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, a las siguientes dependencias:

- Al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad del asunto a resolver (Tonalá, Chiapas), para que informe sobre los bienes inscritos a nombre de la demandante ***** y del demandado *****
*****, en esa dependencia y de ser así proporcione los datos relativos a éstos para que puedan ser plenamente identificados.
- Al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en Tapachula, Chiapas y al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para efectos de que informen si las partes se encuentran dados de alta como trabajadores de alguna empresa o institución gubernamental, debiendo informar el nombre y domicilio de la empresa o institución en la que se encuentran inscritos, así como los datos de afiliación.
- Así como al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para efectos, de que informe si las partes se encuentran dados de alta como trabajadores de alguna empresa o institución gubernamental, debiendo informar el nombre y domicilio de la empresa o institución en la que se encuentran inscritos, así como los datos de afiliación.
- Al Delegado de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con residencia en la ciudad del asunto a resolver (Tonalá, Chiapas), para que informara si las partes que han quedado precisadas en líneas que anteceden, se encuentran dadas de alta en esa institución con alguna negociación o establecimiento y para que además diga si existen vehículos inscritos a su nombre y en caso afirmativo, detalle éstos.
- Seguido el asunto en sus fases procesales y recibidos los informes arriba destacados, el Juez de origen, el **16 dieciséis de**

mayo de 2024 dos mil veinticuatro dictó sentencia definitiva, declarando los siguientes puntos resolutivos:

*---- PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente el expediente número **618/2023** para resolver en la vía de **CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR** el Juicio **ESPECIAL DE ALIMENTOS** promovido por *****
*****, por su propio derecho y en representación de sus niños identificado con las iniciales **S. de J. C.R. y L.F de C.R.**, en contra de *****
*****, donde la actora justifico parcialmente su acción y el demandado contestó la demanda en tiempo y forma.- - - - -*

*---- SEGUNDO.- Se condena a ***** a pagar por concepto de alimentos definitivos a favor de sus hijos personas menores de edad representados por su progenitora, la cantidad que resulte de **doce días** de salario mínimo diario general vigente en la zona, a razón de \$249.00 (Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) para este año 2024 dos mil veinticuatro, y que al mes en conjunto asciende al monto de **\$2,988.00 (Dos mil novecientos ochenta y ocho Pesos 00/100 Moneda Nacional)** el cual aumentara en la medida que lo determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y esto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues se estima que con este monto el deudor podrá solventar a sus acreedores alimentistas una vida decorosa, tal vez sin lujos pero suficiente para desenvolverse en el status social en que se encuentran acostumbrados, tanto ellos como el propio deudor, dejándose sin efecto la medida provisional impuesta en el auto de radicación.- - - - -*

---- TERCERO.- Se le concede al deudor alimentario el término de 5 cinco días para que voluntariamente proceda a hacer el pago de la cantidad señalada por concepto de pensión alimenticia al cual ha sido condenado en la presente sentencia, apercibiéndole que de omitir el cumplimiento de lo aquí ordenado por conducto de la Actuaría Judicial y asociada de la parte actora, se procederá al embargo de bienes de su propiedad que resulten suficientes para garantizarlos, poniéndolos en depósito o intervención conforme la ley para en su momento hacer trance y remate de los mismos y con el producto de la venta realizar el pago correspondiente por concepto de pensión alimenticia.- - - - -

---- **CUARTO.-** Por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia, se declara **IMPROCEDENTE** el reclamo instado por derecho propio por la actora y se absuelve al demandado de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en ese sentido, quedando sin efecto la medida provisional ordenada a su favor en el auto de radicación, quedando a salvo los derechos de los contendientes para hacer el reclamo sobre el pago de compensación económica por trabajo doméstico.- - - - -

---- **QUINTO.-** Por los motivos expuestos en el considerando respectivo, no se hace condena en costas en esta instancia en términos del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.- - - - -

----- **SEXTO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-** - - - - - ”

Sin embargo, se debe destacar, que, el presente asunto, se dirimió la solicitud de pago de alimentos a favor de ***** por ***** por propio derecho y en representación de sus hijos, los niños de identidad resguardada y de nombre por **iniciales S. de J. C.R. y L.F.C.R.**, por lo que el juzgador solicitó informes respectivos tal como lo prevé el artículo 984 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, con la finalidad de saber la situación económica y las prestaciones sociales de salud, si cuentan con bienes muebles e inmuebles, los ingresos declarados ante la autoridad hacendaria de las partes, para de esta forma establecer por parte del A'quo, la debida proporcionalidad y equidad en la cantidad de pago alimentario que deberá otorgar el deudor de dicha obligación alimentista a los acreedores de la misma.

No obstante, lo anterior, se omitió pedir informes a la Administración Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, para que informe sobre las declaraciones de ingresos de las partes, ello en consideración a que de autos se advierte que el demandado es de Profesión

Concediéndole a la autoridad mencionada (Servicio de Administración Tributaria), el término de 3 tres días para que rindan los informes requeridos, contados a partir del día siguiente en que sean notificados de conformidad con el artículo 137, fracción IV de la ley Adjetiva Civil Local, apercibidos que de no dar cumplimiento dentro de la dilación concedida, se harán acreedores de conformidad con la reforma al inciso a), de la base

II, del artículo 41; y, párrafo primero de la fracción VI, del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 73 fracción I del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Chiapas, a una multa por el equivalente a 20 VEINTE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, a razón de \$108.57 (ciento ocho pesos 57/100 moneda nacional) diarios, atento al cálculo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación; es decir, la cantidad de \$2,171.4 (Dos mil ciento setenta y un pesos 4/100 moneda nacional). Lo anterior sin perjuicio de aplicar posteriormente cualquiera de las medidas de apremio establecidas en el artículo 73 del Código Procesal Civil Local, por incumplimiento a un mandato judicial.

Toda vez que los Jueces de lo Familiar se encuentran obligados a intervenir de oficio en asuntos que tengan relación con la familia, fundamentalmente cuando se trate de menores de edad e incapaces, sobre todo cuando se cuestionan derechos tan importantes como es de establecer lo relacionado a los alimentos, además dentro de esa atribución se encuentra la de suplir la deficiencia de los argumentos que planteen las partes y en su caso oficiosamente recabar todas las pruebas encaminadas a obtener mayores elementos para conocer y decidir jurídica y objetivamente lo que más conviene al interés del menor o menores de edad de que se trate, facultad concedida a esta autoridad por los ordinales 286 y 287 del Código Procesal Civil del Estado de Chiapas, aunado al numeral 982 indicado de los preceptos antes citados, de tal suerte que se hace necesario contar con todos los elementos para establecer de modo indiscutible y resolver lo conducente.

TOCA NÚMERO: 298-A-1C01/2024
EXP: 618/2023.

***“Artículo. 286.-** Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquiera cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero; sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral.*

***“Artículo. 287.-** Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias el juez obrara como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando en toda su igualdad”.*

Sin embargo, se insiste si del sumario analizado se aprecia que el juzgador primigenio soslayó ordenar la emisión de la solicitud de informes respecto de la situación fiscal, así como las declaraciones de ingresos de las partes, ante el Servicio de Administración Tributaria en Chiapas, dependiente de la Secretaría de Hacienda Federal, tanto en la sede de Tapachula, como en la de Tuxtla Gutiérrez, atento a que ambas autoridades de registro de contribuyentes se encuentran cerca del Distrito Judicial del que es parte el presente asunto.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 984 y 986 del Código Adjetivo Civil del Estado de Chiapas, se causó una violación procesal, que vulnera el debido proceso, pues dicha deficiencia trasciende en el sentido del fallo recurrido, ya que, se resolvió sin tener un diagnóstico real y completo de los gastos alimentarios que tiene tanto los

Por otra parte, también se advierte por este Tribunal de Alzada, que existe, la mención de la parte actora, *****

*****, en su escrito de demanda, que el demandado,
***** *****, es propietario del Bar “EL RETEN”, situación que fue negada por el deudor alimentario, sin embargo, ello no impide que, el Juez de la causa solicite informes al Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, respecto, a nombre de quien está registrado el permiso municipal de venta de bebidas alcohólicas, que permite operar el negocio en mención, o bien si la misma funciona con un permiso rentado y quien es el titular de esta, del bar antes mencionado, ubicado en Calle Juan José Calzada, esquina con Avenida las Cruces, de la Colonia Evolución en la ciudad de Tonalá, Chiapas.

Tal circunstancia dará certeza respecto a que si el demandado (***** **** ***** *****), es el responsable en el disfrute de la concesión para la venta y distribución de bebidas alcohólicas del Bar donde labora. Lo anterior al no hacerse

TOCA NÚMERO: 298-A-1C01/2024
EXP: 618/2023.

oficiosamente provocó que, al momento en que se emitió la sentencia apelada no se contaba con elementos reales sobre la capacidad económica de las partes contendientes, por tanto, no era posible pronunciar una sentencia que se ajustara al principio de proporcionalidad y equidad en la fijación de los alimentos a favor de los acreedores alimentarios.

Por lo que, al solicitarse el informe arriba descrito, deberá concederse a la autoridad Municipal mencionada (Ayuntamiento de Tonalá, Chiapa), el término de 3 tres días para que rindan los informes requeridos, contados a partir del día siguiente en que sean notificados de conformidad con el artículo 137, fracción IV de la Ley Adjetiva Civil Local, apercibidos que de no dar cumplimiento dentro de la dilación concedida, se hará acreedor de conformidad con la reforma al inciso a), de la base II, del artículo 41; y, párrafo primero de la fracción VI, del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 73 fracción I del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Chiapas, a una multa por el equivalente a 20 VEINTE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, a razón de \$108.57 (ciento ocho pesos 57/100 moneda nacional) diarios, atento al cálculo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación; es decir, la cantidad de \$2,171.4 (Dos mil ciento setenta y un pesos 4/100 moneda nacional). Lo anterior sin perjuicio de aplicar posteriormente cualquiera de las medidas de apremio establecidas en el artículo 73 del Código Procesal Civil Local, por incumplimiento a un mandato judicial.

En ese tenor, es necesario para emitir una resolución acorde al principio de proporcionalidad, en observancia a los

criterios de idoneidad, de utilidad y de trascendencia pues guarda un nexo directo con los hechos que se traten de probar y eficacia para dilucidar los puntos litigiosos; por tanto, influye para poder determinar cuáles son las posibilidades económicas de las partes en la contienda judicial.

Ilustra lo anterior, la jurisprudencia⁷ emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos.”

⁷ Registro: 2003069, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 401

- Se recabe lo solicitado en vía de informes, a la Administración Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, con sede en Tapachula, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, correspondientes a las regiones 1 y 2 de Chiapas, con dirección la primera, en Calle Segunda Oriente Norte núm. 227, Planta Baja, entre Primera Norte Oriente y Segunda Norte Oriente, Col. Centro C.P., 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y la segunda, en Central Pte. núm. 17, piso 1, entre calles 2 y 4 Norte, Col. Centro, CP. 30700, Tapachula, Chiapas. para que informen los ingresos declarados de los contribuyentes:

Correspondientes, de los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Ya sea vía documental o electrónica (por el Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad) – **Programa informático SIARA**-, está última (previa razón secretarial de su envío y acuse de recibo) en el expediente, tienen registro de declaraciones fiscales en los años mencionados a su nombre y en caso de ser

afirmativo, remita el informe de las cantidades declaradas. Concediéndole a la autoridad mencionada, el término de 3 tres días para que rindan los informes requeridos, contados a partir del día siguiente en que sean notificados de conformidad con el artículo 137, fracción IV de la ley Adjetiva Civil Local, apercibidos que de no dar cumplimiento dentro de la dilación concedida, se harán acreedores de conformidad con la reforma al inciso a), de la base II, del artículo 41; y, párrafo primero de la fracción VI, del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 73 fracción I del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Chiapas, a una multa por el equivalente a 20 VEINTE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, a razón de \$108.57 (ciento ocho pesos 57/100 moneda nacional) diarios, atento al cálculo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación; es decir, la cantidad de \$2,171.4 (Dos mil ciento setenta y un pesos 4/100 moneda nacional). Lo anterior sin perjuicio de aplicar posteriormente cualquiera de las medidas de apremio establecidas en el artículo 73 del Código Procesal Civil Local, por incumplimiento a un mandato judicial.

- Se solicite informes al Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Chiapas, vía oficio, para que informe, a nombre de quien está registrado el permiso municipal de venta de bebidas alcohólicas, que permite operar el Bar “**

***** ***** ** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

TOCA NÚMERO: 298-A-1C01/2024
EXP: 618/2023.

***** ** ** ***** ***** ** ** ***** ** ***** Chiapas, o bien si la misma funciona con un permiso rentado y quien es el titular de esta.

Concediéndole a la autoridad mencionada, el término de 3 tres días para que rindan los informes requeridos, contados a partir del día siguiente en que sean notificados de conformidad con el artículo 137, fracción IV de la ley Adjetiva Civil Local, apercibidos que de no dar cumplimiento dentro de la dilación concedida, se harán acreedores de conformidad con la reforma al inciso a), de la base II, del artículo 41; y, párrafo primero de la fracción VI, del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 73 fracción I del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Chiapas, a una multa por el equivalente a 20 VEINTE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, a razón de \$108.57 (ciento ocho pesos 57/100 moneda nacional) diarios, atento al cálculo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación; es decir, la cantidad de \$2,171.4 (Dos mil ciento setenta y un pesos 4/100 moneda nacional). Lo anterior sin perjuicio de aplicar posteriormente cualquiera de las medidas de apremio establecidas en el artículo 73 del Código Procesal Civil Local, por incumplimiento a un mandato judicial.

En congruencia con lo anterior, lo que procede es **REVOCAR la sentencia definitiva de primer grado y ordenar la reposición del procedimiento en Primera Instancia** a partir

del proveído que turna los autos a sentencia, para los efectos descritos anteriormente.

IV.- Por lo que, los puntos resolutivos de la sentencia recurrida deberán quedar de la siguiente manera:

“PRIMERO.- Por las consideraciones vertidas en esta resolución, se repone el procedimiento a partir del proveído que turna los autos para sentencia para los efectos siguientes, se giren oficios:

1.- A la Administración Local de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, con sede en Tapachula, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, correspondientes a las regiones 1 y 2 de Chiapas, con dirección la primera, en Calle Segunda Oriente Norte núm. 227, Planta Baja, entre Primera Norte Oriente y Segunda Norte Oriente, Col. Centro C.P., 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y la segunda, en Central Pte. núm. 17, piso 1, entre calles 2 y 4 Norte, Col. Centro, CP. 30700, Tapachula, Chiapas. para que informen los ingresos declarados de los contribuyentes: *****

********, con ****, y CURP: ********

, y ** con RFC: ********

y CURP: ** Correspondientes, de los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Ya sea vía documental o electrónica (por el Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad) –Programa informático SIARA-, está última (previa razón secretarial de su envío y acuse de recibo) en el expediente, tienen registro de declaraciones fiscales en los años mencionados a su nombre y en caso de ser afirmativo, remita el informe de las cantidades declaradas.***

- “2.-Se solicite informes al Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Chiapas, vía oficio, para que dé a conocer, a nombre de quien está registrado el permiso municipal de venta de bebidas alcohólicas, que permite operar el Bar “**

***** ** ***** Chiapas, o bien si la misma funciona con un permiso rentado y quien es el titular de esta.”***

“Concediéndoles a ambas autoridades, el término de 3 TRES DÍAS para que rindan los informes requeridos, contados a partir del día siguiente en que sean notificados de conformidad con el artículo 137, fracción IV de la ley Adjetiva Civil Local, apercibidos que de no dar cumplimiento dentro de la dilación concedida, se harán acreedores de conformidad con la reforma al inciso a), de la base II, del artículo 41; y, párrafo primero de la fracción VI, del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política

“TERCERO. - Notifíquese y cúmplase”.

SEGUNDO.- Se **ORDENA** **REPONER** **EL**
PROCEDIMIENTO para que el Juez de Primer Grado dé
cumplimiento a los efectos precisados en el considerando
CUARTO del presente fallo.

TERCERO.- Mediante oficio remítase copias certificadas de la presente resolución a la Juez natural, para su conocimiento y efectos legales correspondientes; oportunamente archívese el presente toca como asunto concluido.

CUARTO.- Notifíquese y Cúmplase.

Así lo resolvieron los Ciudadanos Magistrados que integran la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Licenciada CLAUDIA LUCÍA DOMÍNGUEZ ACUÑA, Licenciada MARIA ITZEL BALLINAS BARBOSA y el Licenciado GUILLERMO HORACIO ESPONDA ORANTES; siendo presidenta la primera y ponente la segunda de los nombrados, y firman por ante la licenciada CLAUDIA VIDAL HERNÁNDEZ, Secretaria General de Acuerdos, que da fe.

MIBB/JJPR/jirl.

MAGISTRADA PRESIDENTA

LIC. CLAUDIA LUCÍA DOMÍNGUEZ ACUÑA.

MAGISTRADA PONENCIA “A”

LIC. MARÍA ITZEL BALLINAS BARBOSA

**TOCA NÚMERO: 298-A-1C01/2024
EXP: 618/2023.**

MAGISTRADO PONENCIA “B”

LIC. GUILLERMO HORACIO ESPONDA ORANTES

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

LIC. CLAUDIA VIDAL HERNÁNDEZ.

ELIMINADO: 36 elementos. FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo de la constitución política de los Estado Unidos Mexicanos; 3 de la Constitución Política del estado libre y Soberano de Chiapas; 100, 106 fracción III, 107 y 116 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6 de la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 134, 139, y 140 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; 4 fracción II, 12 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas; Séptimo fracción III y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. **MOTIVO:** se trata de información confidencial concerniente a datos personales identificativos.